



**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A**  
**Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ**

Bogotá, D.C., cinco ( 5) de julio de dos mil dieciocho (2018).

**Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00**

**Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros**

**Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro**

**ACCIÓN DE TUTELA – SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Decide la Sala de Subsección, la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Jairo Centeno Castillo, Flor María Tenorio Preciado, Andersson Centeno Tenorio y Kenia Saray Centeno Tenorio, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.

**I. ANTECEDENTES**

Los accionantes interponen acción de tutela, mediante apoderado judicial, en contra del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de las sentencias de 25 de mayo de 2017 y 26 de enero de 2018 proferidas dentro del proceso de reparación directa 2014-00369 (4712) seguido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

## 1. Hechos

El sustento fáctico sobre el cual se edifican las pretensiones es el siguiente:

El señor Edilson Darío Centeno Tenorio, era hijo y hermano de los accionantes quien «para el periodo 2006 a 2007» se desempeñaba como auxiliar de archivo del Centro Hospital Divino Niño del municipio de Tumaco.

El 11 de julio de 2012, siendo aproximadamente las 9.30 p.m., miembros de la Policía Nacional en una diligencia de allanamiento requisaron y solicitaron la identificación a Edilson Darío Centeno y una vez devuelto el documento, al dar la espalda a los miembros de la Policía Nacional «estos proceden a disparar varios proyectiles de arma de fuego que le ocasiona la muerte al señor EDILSON DARIO CENTENO TENORIO», y luego su cuerpo fue lanzado al mar. Según acta de necropsia, recibió 7 impactos de proyectil.

Su muerte fue presentada como la baja del jefe de finanzas de las «Bacrim» que operan en el municipio de Tumaco, por lo que la investigación correspondió inicialmente a la Fiscalía 61 Especializada de Tumaco, quien informó que el proceso fue remitido por competencia al Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar DENAR, razón por la que no se le facilitó al padre del occiso copia del acta de levantamiento del cadáver, el informe de balística, la necropsia, así como el estado de la investigación.

A través recurso de insistencia que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, el Instituto Nacional de Medicina Legal entregó copia simple del informe pericial de necropsia practicado al cadáver de Edilson Darío Centeno Tenorio, sin que cuente con diagrama de lesiones y fotografía o procedimientos de necropsia.

Por los anteriores hechos los accionantes interpusieron demanda de reparación directa radicado 52001333300620140036900, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, que negó las pretensiones de la demanda al indicar que en el expediente no existía informe de balística, con lo que no se pudo demostrar que los disparos recibidos por el occiso provinieron de armas de dotación oficial del cuerpo policial, bajo el entendido que

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

la simple verificación de un intercambio de disparos no es motivo suficiente para vincular su responsabilidad, máxime si de la prueba allegada se tenía demostrado que los policiales escucharon el lanzamiento de unos objetos al mar y que Edilson Darío Centeno Tenorio huyó del inmueble donde se estaba llevando a cabo la diligencia de registro y allanamiento, arrojándose al mar debajo de la casa, con lo que salió de la órbita de custodia en que se encontraba bajo el operativo llevado a cabo y que de allí abajo, fuera del inmueble, fue de donde se escucharon los disparos, algunos dirigidos contra el personal policial que se encontraba afuera de la casa, alcanzando, incluso, uno de ellos al Patrullero Escobar.

Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación, en el que se indicó que el juzgado no tuvo en cuenta los elementos probatorios que demostraban el exceso de fuerza con que actuó la Policía Nacional, tal como lo determinó el Consejo Superior de la Judicatura en el proceso radicado 1001010200020150078900 de 6 de mayo de 2015, donde se dijo que el sujeto estaba desarmado y que estaba protegido por la Policía Nacional en razón a que había sido requisado, pero al contrario se le hicieron 7 disparos en su cuerpo, de frente y en la espalda, lo que denota el uso exagerado de la fuerza con que actuaron los miembros de la Policía, lo que se aleja de la naturaleza de su servicio.

Además, la sentencia acusada «deja en el limbo una explicación razonable que explique la muerte del señor EDILSON DARIO CENTENO TENORIO, cuando se encontraba en custodia de miembros de la Policía Nacional».

Que se desconoció el precedente de la Sección Tercera, de 20 de octubre de 2014, radicado 0500123310001996-00, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, en donde en un caso similar accedió a las pretensiones de la demanda, sin necesidad del informe de balística.

Además manifestó que pese a la grave violación de derechos humanos, el Estado Colombiano se ha negado a investigar, por cuanto en su momento el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar declaró la falta de competencia para su investigación, trasladando su solicitud a la Fiscalía 61 Seccional de Tumaco, que a su vez la remitió a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el cual

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

mediante providencia de 6 de mayo de 2015 dirimió el conflicto negativo de jurisdicciones, asignando la competencia a la Fiscalía 61 Seccional de Tumaco que finalmente lo remite a la Fiscalía 13 Seccional de esa localidad.

Dicen que debió tenerse en cuenta que la parte actora siempre quiso recaudar los elementos probatorios, pero incluso el acta de necropsia de medicina legal solo fue posible recolectarla a través de recurso de insistencia tramitado ante el Tribunal Administrativo de Nariño.

Además, los testimonios de los señores Florinda Mesías Sevillano, Wilson Manuel Preciado Riascos, Roberto Antonio Zúñiga Quiñones, Nilson Gualberto Quiñones, precisaron que el causante se encontraba en custodia por parte de los miembros de la Policía Nacional.

A través de sentencia de 26 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño, confirmó el fallo denegatorio al indicar que si bien se acreditó que la muerte del señor Edilson Darío Centeno ocurrió por el accionar de los miembros de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones, ésta se encontró justificada por la actuación bélica que fue desplegada por el causante al arremeter con disparos de arma de fuego contra los uniformados con el fin de huir del lugar en el que se llevaba a cabo la diligencia, y porque no se aportó al plenario elemento demostrativo que pudiera generar dudas respecto de que la versión de la entidad demandada no se ajuste a la realidad.

Que la tesis consistente en que quienes se encontraban en la vivienda, estaban desarmados cuando se llevó a cabo el operativo no puede ser el punto de referencia para que por sí sola genere certeza sobre la responsabilidad de la entidad demandada. Además, con posterioridad al hecho, se encontraron dos armas de fuego habilitadas para disparar y cuatro teléfonos celulares.

Que es indudable que la muerte del joven se produjo como consecuencia de su exclusiva culpa, cuando en su afán de huir generó un enfrentamiento armado contra los miembros de la Policía Nacional, quienes se vieron en la obligación de repeler el ataque en legítima defensa de su vida, de su protección y de las demás personas que se encontraban en el lugar, lo cual permite concluir que no existe nexo de causalidad entre el daño y la actuación de la demandada.

## 2. Fundamentos de la acción

En la acción de tutela, el apoderado de los accionantes indica que las sentencias de primera y segunda instancia incurrieron en vulneración *iusfundamental* por incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

1. Defecto fáctico. Esto frente a la inspección técnica a cadáver, el protocolo de necropsia practicado al cadáver del señor Edilson Darío Centeno (donde se dijo que fue impactado por arma de fuego en siete oportunidades), la diligencia de declaración rendida por el señor Carlos Andrés García Hernández (quien indicó que en la diligencia de allanamiento el occiso se encontraba desarmado y bajo custodia de la Policía Nacional). Que no se tuvo en cuenta la providencia de 10 de junio de 2014 proferida por el Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto, el cual al considerar la muerte del demandante como una grave violación de derechos humanos remite dichas diligencias a la Fiscalía General de la Nación.

Tampoco se tuvo en cuenta la providencia proferida por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de 6 de mayo de 2015 con ponencia del Dr. Angelino Lizcano Rivera, en la que asignó la competencia para investigar el homicidio del señor Edilson Darío Centeno a la Fiscalía General de la Nación, por tratarse de una grave violación de los derechos humanos.

Que la decisión del Tribunal Administrativo de Nariño es arbitraria por cuanto en las pruebas relacionadas se advierte que el joven Darío Centeno se encontraba desarmado y en custodia de los policías y sin embargo según las entidades el demandante es culpable de su propia muerte por tratar de huir y disparar en contra de los uniformados, sin embargo no existe prueba técnica que demuestre que accionó un arma de fuego.

Que no puede aceptarse que para el Juzgado Sexto Administrativo de Pasto, no se haya accedido a las pretensiones de la demanda por la ausencia de prueba de balística y por el Tribunal (que reconoció que la muerte del señor CENTENO ocurrió a manos de la Policía) en cuanto consideró que la muerte se justificó en la legítima defensa de los miembros de la Policía Nacional, con lo que obedeció a su

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

propia culpa, pese a que no se probó el supuesto enfrentamiento. Además se desconoció el testimonio de Andrés García Hernández, quien indicó que el occiso se encontraba desarmado y en custodia de los policías.

### **3. Pretensiones**

Las pretensiones de la acción de tutela son las siguientes (Fol. 16-17):

«1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 26 de Enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño dentro del expediente 2014-369, y la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pasto del 25 de mayo de 2017 dentro del medio de control de Reparación directa promovido por el señor LUIS JAIRÓ CENTENO Y OTROS, en contra de la Nación. MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO que en el término de cuarenta y ocho (48) horas proceda a dictar nueva sentencia, teniendo en cuenta TODAS las pruebas documentales y testimoniales recaudadas procediendo a declarar la Responsabilidad Extracontractual de la Nación Policía Nacional, en la muerte del señor Edilson Darío Centeno, acaecida el 11 de Julio de 2012, en el Municipio de Tumaco (N), de conformidad a las pretensiones de la demanda inicial presentada.

Las demás órdenes que considere la Alta corporación para hacer efectivo el cumplimiento del fallo dado que se trata de una grave violación a los derechos humanos. » (f. 16).

### **4. Trámite procesal**

Avocado el conocimiento de la presente acción mediante auto de 11 de mayo de 2018, se ordenó notificar como accionados a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto; como terceros interesados a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y a los señores Nidia Centeno Castillo, Pérsides Tenorio Preciado, Aracely Tenorio Preciado, Deisy Tenorio Preciado, Herminson Valencia Centeno, María Floricelda Tenorio Preciado y Fulton Tenorio Preciado. Igualmente se ordenó la notificación de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado para que intervinieran en el proceso en caso de considerarlo necesario (f. 45).

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

## 5. Intervenciones

**El Tribunal Administrativo de Nariño**, por conducto de la Magistrada Beatriz Isabel Melodelgado Pabón señaló que la providencia acusada tiene como sustento la demanda, las pruebas allegadas y los diferentes pronunciamientos de las partes lo que permitió establecer que hubo culpa de la víctima y ésta fue la causa exclusiva y excluyente del daño. Además que la parte actora contó con todas las oportunidades para presentar pruebas, interponer los recursos, hacer uso de la contradicción, allegar alegatos y ejercer sus derechos procesales.

Además no era posible, teniendo en cuenta las circunstancias procesales emitir condena en contra de las demandadas.

**La Nación, Ministerio de Defensa Nacional**, a través de apoderada judicial, consideró que las pretensiones de amparo del accionante son infundadas en atención a que frente al defecto fáctico solo se señalaron las pruebas pertinentes pero no se indicó cómo se debieron valorar, ni cuál es el entendimiento correcto de las mismas, ni por qué los funcionarios judiciales interpretaron de manera incorrecta las pruebas, siendo deber de los accionantes señalar por qué de tales medios de prueba se desprende la existencia de responsabilidad de la Policía Nacional.

Citó en extenso la providencia del Tribunal Administrativo y concluyó que sí se tuvo en cuenta las pruebas que los accionantes señalaron que fueron mal valoradas pues de las mismas no se desprende que la muerte del señor fue producto de un actuar imprudente de la administración sino que al contrario ocurrió por su propia actuación al evadir el operativo policial y posteriormente estar en la zona de donde provinieron los disparos contra la integridad física de los uniformados, es un hecho que sin duda excluye de responsabilidad a los miembros de la institución.

Tanto el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, como los terceros interesados no presentaron informe.

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Recibido el expediente sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a desatar la presente controversia.

## **II. CONSIDERACIONES**

### **1.- Competencia**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo primero del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017, esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional.

### **2.- Problema jurídico**

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala que el problema jurídico a resolver se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo de Nariño incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, con ocasión de la expedición de la sentencia de 26 de enero de 2018, que en sede de alzada, confirmó la sentencia de primera instancia, en el proceso de reparación directa interpuesto por los accionantes, por la muerte de Edilson Darío Centeno Tenorio a manos de miembros de la Policía Nacional.

### **2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales**

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente<sup>1</sup> aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta Corporación<sup>2</sup>, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, atendiendo a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, sin importar su

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.

<sup>2</sup> Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germanía Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

linaje, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso.

De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, mientras que los especiales deben acreditarse para que la protección del derecho fundamental prospere.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, al indicar que la acción constitucional resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales, con ocasión de la actividad jurisdiccional, se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

**2.1.** En el presente caso, advierte la Sala que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

**2.1.1.** En efecto, los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos se encuentran plenamente individualizados.

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

**2.1.2.** Así mismo se encuentra que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

**2.1.3.** De igual forma, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, pues no han transcurrido más de seis (6) meses desde que se profirió la sentencia de segunda instancia objeto de censura (el 26 de enero de 2018) y la interposición de la acción de tutela (30 de abril de 2018, fol. 1).

**2.1.4.** Finalmente, el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se circunscribe a establecer una presunta violación *ius fundamental* como consecuencia de los supuestos defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial, en que incurrió el Tribunal Administrativo de Nariño, con ocasión de la expedición de la providencia de 26 de enero de 2018.

### **3. Los defectos a que alude la acción de tutela en la sentencia analizada.**

A las providencias cuestionadas se les atribuyen los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

Ahora bien, como se relató en la parte histórica, en este caso, la acción se tutela se atacaron las providencias de primera instancia y segunda instancia proferidas dentro del proceso de reparación directa 52001333300620140036900, a través de las cuales se negó las pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Luis Jairo Centeno Castillo y otros, contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, por la muerte del joven Edilson Darío Centeno Castillo, cuando se realizaba una diligencia de allanamiento o registro.

Al efecto, la primera decisión se cuestionó a través de la posible configuración del defecto fáctico, al señalar que «dejó en el limbo una explicación razonable que explique la muerte del señor Edilson Darío Centeno Tenorio, cuando se encontraba en custodia de los miembros de la Policía Nacional.» y por cuanto desconoció una decisión del Consejo de Estado de 20 de octubre de 2014, con

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00

Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, dentro del proceso radicado 05001-23-31-000-1996-00439-01, donde se señaló que pese a no existir constancia del arma que disparó el proyectil ni mucho menos del funcionario, al precisar que la falla administrativa es anónima y o se requiere precisar ni individualizar al sujeto activo de la conducta.

Ahora bien, como en la decisión de segunda instancia, dicha decisión se corrigió por cuanto allí sí se estableció que la muerte del joven Edilson Darío Centeno Tenorio, ocurrió a manos de los miembros de la Policía Nacional, al señalar lo siguiente:

«En este asunto se encuentra plenamente acreditado el daño, que se traduce en la muerte del señor Edilson Darío Centeno Tenorio, la que se causó con arma de dotación oficial de propiedad de la Policía Nacional, en desarrollo de una diligencia de allanamiento y registro con fines de captura en flagrancia y búsqueda de elementos materiales de prueba, que se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la cabecera del Municipio de Tumaco (N.)».

De acuerdo a lo anterior analizará la Sala de Subsección únicamente los defectos que se le atribuyen a la sentencia de 26 de enero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño.

### 3.1. Defecto fáctico

La jurisprudencia constitucional resulta prolífica al estructurar la dimensión **negativa** del defecto fáctico y lo ha entendido como aquel vicio que implica una apreciación arbitraria, irracional y caprichosa de la prueba<sup>3</sup>, o la omisión en su valoración<sup>4</sup> que implica dar por no probado el hecho o la circunstancia que del medio de convicción emerge clara y objetivamente.

---

<sup>3</sup> Sentencia T-442 de 1994 "Se aprecia más la arbitrariedad judicial en el juicio de evaluación de la prueba, cuando precisamente ignora la presencia de una situación de hecho que permite la actuación y la efectividad de los preceptos constitucionales consagratorios de derechos fundamentales, porque de esta manera se atenta contra la justicia que materialmente debe realizar y efectivizar la sentencia, mediante la aplicación de los principios, derechos y valores constitucionales".

<sup>4</sup> Sentencia T-239 de 1996 "Cuando un juez omite apreciar y evaluar pruebas que inciden de manera determinante en su decisión y profiere resolución judicial sin tenerlas en cuenta, incurre en vía de hecho y, por tanto, contra la providencia dictada procede la acción de tutela. La vía de hecho consiste en ese caso en la

En el desarrollo y aplicación de esta causal de tutela, la jurisprudencia ha sido especialmente cuidadosa en iterar que la intervención del juez de tutela respecto al manejo de la prueba dado por el juez natural es, y debe ser, extremadamente reducido, pues el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural consagrados en la Constitución Política (artículos 29 y 230), impiden que un funcionario ajeno a la controversia efectúe un nuevo examen exhaustivo del material probatorio, en clara usurpación de las competencias asignadas por la Constitución y la ley en desarrollo del principio democrático de separación de poderes que inspira el modelo de Estado Social de Derecho.

En otras palabras, las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba, al no constituir errores fácticos, impiden cualquier intromisión del juez de tutela respecto al análisis del material probatorio efectuado en un proceso ordinario, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el defecto fáctico también admite una dimensión **positiva**, que se materializa "cuando el juez somete a consideración y valoración un elemento probatorio cuya ilegitimidad impide incluirlo en el proceso. Se trata de la inclusión y valoración de la prueba ilegal, es decir, de aquella que ha sido practicada, recaudada, y valorada en contravía de las formas propias de cada juicio, concretamente, del régimen legal de la prueba, o de la prueba inconstitucional, esto es, de aquella prueba que en agresión directa a los preceptos constitucionales, ha sido incluida en el proceso en desconocimiento y afrenta de derechos fundamentales."<sup>5</sup>

La aplicación de este razonamiento a un determinado caso, desde luego, debe realizarse de manera restrictiva, pues es claro que no toda irregularidad o error inofensivo tiene la virtualidad de desconocer la parte final del artículo 29 superior. Por consiguiente, la regla de exclusión solo puede cobijar a aquellos elementos de

---

ruptura deliberada del equilibrio procesal, haciendo que, contra lo dispuesto en la Constitución y en los pertinentes ordenamientos legales, una de las partes quede en absoluta indefensión frente a las determinaciones que haya de adoptar el juez, en cuanto, aun existiendo pruebas a su favor que bien podrían resultar esenciales para su causa, son excluidas de antemano y la decisión judicial las ignora, fortaleciendo injustificadamente la posición contraria".

<sup>5</sup> Corte Constitucional. Sentencia T-233 de 2007.

convicción que fueron obtenidos de manera inconstitucional o con violación de reglas legales que por su importancia tornan a una prueba en ilícita<sup>6</sup>.

Bajo esa misma línea de interpretación, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indica que no cualquier desconocimiento de las formalidades establecidas por el Legislador para el decreto y práctica de pruebas impone excluir la prueba defectuosa. Para ese alto tribunal las irregularidades menores que no afectan la estructura del proceso ni el derecho de defensa, no imponen la exclusión de la prueba<sup>7</sup>.

Queda entonces claro que, cualquiera de las hipótesis sobre las cuales se edifica la causal de defecto fáctico, que obedece a situaciones excepcionálísimas que implican una seria afrenta al amplio contenido de lo que el artículo 29 Constitucional entiende como debido proceso.

### 3.2. Del desconocimiento del precedente judicial

El desconocimiento del precedente judicial ha sido considerado por la doctrina constitucional como una de las causales constitutivas de vías de hecho, que se configura cuando no se aplica ante un mismo supuesto fáctico o caso similar, una misma razón de derecho que se haya adoptado en otro caso de igual naturaleza, a menos que el juez de la causa lo justifique de manera razonada<sup>8</sup>.

Es de anotar que la misma jurisprudencia constitucional ha clasificado el precedente jurisprudencial en razón de la jerarquía que presentan las autoridades judiciales. Por tanto, los fallos no sólo se comparan en relación con juzgadores del mismo nivel, sino que también se hace tomando de referente las decisiones de sus superiores. El primero de ellos considerado como en **sentido horizontal** y el segundo en **sentido vertical**.

<sup>6</sup> Ver Sentencia SU-159 de 2002.

<sup>7</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia de 16 de diciembre de 1998, dictada en el proceso No. 10373.

<sup>8</sup> Sentencia C-104 de 1993. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Para lo que al asunto interesa, en cuanto al **precedente vertical** ha establecido la Corte Constitucional, que con todo, también existe la posibilidad de que un funcionario judicial pueda apartarse de su propio precedente, teniendo en cuenta los caracteres instrumental y sustancial, referentes al órgano que realiza el cambio de precedente y las condiciones de realización del mismo.

En ese sentido es viable que dentro de un mismo cuerpo Colegiado los Magistrados se aparten de las decisiones constitutivas del precedente o el de otra Sala, siempre y cuando expongan en su decisión los argumentos razonables que sirvieron de fundamento para ello, resguardando de esta forma tanto las exigencias de igualdad como las garantías de independencia judicial exigidas<sup>9</sup>.

Ahora bien, las reglas de derecho que por su carácter amplio y general inspiran el sentido de una decisión, configuran criterios que el juez de instancia puede adoptar y/o adaptar para encontrar una solución al caso pendiente de fallo, pero no resultan en ningún modo obligatorios.

Como se ve, la imposición de aplicar la misma regla que solucionó un caso del pasado al posterior, depende de si los supuestos de hecho de los dos asuntos son similares. Pero, las pautas que se presentan más generales son solamente una guía para el juez ordinario, que le puede indicar una de varias formas de fallar. Ha dicho la Corte que:

«...el precedente judicial se construye a partir de los hechos de la demanda. El principio general en el cual se apoya el juez para dictar su sentencia, contenida en la ratio decidendi, está compuesta, al igual que las reglas jurídicas ordinarias, por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho define el ámbito normativo al cual es aplicable la subregla identificada por el juez. De ahí que, cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente. Lo anterior se apoya en el principio de igualdad, que obliga aplicar la misma regla a quienes estén en la misma situación de hecho»<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Sentencia T-268 de 2010 M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

<sup>10</sup> Sentencia T-1092 de 2007 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Igualmente, se debe tener en cuenta que de manera general el precedente judicial no lo conforma un sólo caso, sino como se dijo, una serie de pronunciamientos que la mayoría de las veces evolucionan hacia reglas más claras, que definen con mayor especificidad su alcance.

Por último, en virtud de la autonomía interpretativa con que cuentan los jueces, puede aceptarse tanto en el precedente horizontal, como en el vertical, que las distintas Salas de Decisión se aparten de los precedentes judiciales, sólo si exponen unas razones debidamente fundadas, que justifiquen tal criterio.

#### **4. Análisis de la Sala**

En este caso se cuestionan las providencias 25 de mayo de 2017 y 26 de enero de 2018, proferidas por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de las cuales se negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa formulada por los accionantes. Por lo anterior, es necesario referirse a las mismas, como sigue a continuación:

##### **4.1. Sentencia del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto de 25 de mayo de 2017.**

A través de esta providencia se negaron en primera instancia; al efecto el juez se refirió a la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado, específicamente frente al régimen de la falla del servicio del Estado en relación con el uso de armas de dotación, para lo cual se apoyó en la sentencia de la Sección Tercera, Subsección A, de 23 de junio de 2011, dentro del proceso radicado con el No. 21055, con ponencia de la Dra. Gladys Agudelo Ordoñez, frente a la utilización de las armas de dotación oficial, donde se dijo que los agentes policiales inmiscuidos hicieron uso desmedido de su armamento de dotación oficial en primer lugar por el hecho de haber detonado en dos oportunidades sus armas para controlar un solo sujeto que se encontraba huyendo y para propender a su captura, quien no ejercía contra los agentes

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

agresión inminente, máxime si se tiene en cuenta que no ejercía contra los agentes agresión inminente.

En cuanto a la valoración probatoria, indicó que como quiera que de conformidad con el decreto probatorio que se surtió a propósito de la audiencia inicial celebrada en 12 de agosto de 2016, se solicitó a petición de la parte demandante la copia de los expedientes relativos a la investigación penal y disciplinaria que se pudo haber adelantado por cuenta de los hechos que motivaron la demanda.

Dijo que el proceso penal fue remitido a ese despacho por parte de la Fiscalía 13 Especializada de Tumaco y que tales piezas estuvieron a disposición y bajo la contradicción de la parte demandada, conforme con lo señalado en el artículo 174 del CGP.

De acuerdo a lo anterior, encontró probada la muerte del señor «YIRSON JOSÉ TENORIO QUIÑONES» quien en vida se identificaba con la CC 1.010.059.053 que nació el 21 de julio de 1982 y falleció el 11 de junio de 2012, según copia hábil de los correspondientes registros de civiles de nacimiento defunción.

Que de conformidad con lo señalado en el informe pericial de necropsia 2012010152835000180, expedido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el herido fue herido por proyectiles de arma de fuego en una diligencia de allanamiento. Ya que la causa de muerte obedece a heridas penetrantes en tórax por proyectil de arma de fuego y que la manera de la muerte fue violenta y producida por un homicidio. Tuvo siete orificios de entrada y salida causadas por los proyectiles.

Que de conformidad con el informe ejecutivo de policía judicial, que da cuenta de una investigación por los delitos de fabricación, tráfico, y porte de arma de fuego o municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en la que dispone la realización de una diligencia de allanamiento y registro de un inmueble donde al parecer se encontraban en su interior dos individuos conocidos por Darío y Felipe,

**Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00**  
**Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros**  
**Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro**

quienes por información de una persona de sexo femenino hacían parte de la organización criminal denominada «Los rastros». Que por lo anterior se profirió una orden de allanamiento y registro confines de captura y búsqueda de elementos materiales de prueba, donde se indicó que el bien que se pretendía allanar era utilizado como escondite por las personas conocidas con los alias de Felipe, Darío y sus escoltas, quienes se encontraban armados y al parecer eran miembros de los integrantes de la banda criminal de los rastros y por eso la información aportada por la informante sería creíble y fundada por lo que se daban los elementos para proceder a restringir los derechos de la inviolabilidad del domicilio e intimidad de los habitantes de los inmuebles.

Que de acuerdo con el informe de allanamiento se tiene que el occiso salto de la casa allanada por una ventana que da al mar y al percatarse de ello los miembros del EMCAR, que prestaban seguridad, se tiene que empezó una balacera, resultando herido uno de los uniformados. Que buscaron con linternas en el sitio, pero como a la hora, encontraron el cuerpo de Edilson Darío Centeno Tenorio y al verificar que estaba muerto lo aseguraron para que la corriente del mar no se lo llevara y se pudiera realizar la inspección técnica al cadáver.

Que como a las dos de la mañana debajo de la casa encontraron una pistola calibre 9 mm marca «turkiye» con su proveedor y 9 cartuchos de la misma, como a medio metro del cuerpo del occiso. Y que luego se encontró una segunda pistola 9 mm, de marca ZC100, con un proveedor y 5 cartuchos, que se encontraba como a un metro de distancia del occiso.

Además, que de conformidad con el acta de registro y allanamiento firmada por un integrante de la Policía Judicial según el cual dentro del inmueble no fueron hallados elementos materiales probatorios, por fuera del mismo, se encontró una pistola de 9mm de marca CZ con un proveedor metálico 9 mm y 5 cartuchos 9mm, los que fueron entregados en cadena de custodia embalados y rotulados y sobre los cuales se solicitó la realización de una experticia técnica; que según formato de investigador de campo, al verificar las armas se advirtió que las mismas eran aptas para disparar.

De igual manera, para reconstruir la forma en que se desarrolló, la operación de registro y allanamiento citó las declaraciones rendidas por los demás miembros de la Policía Nacional Reinel Eduardo Escobar Sabogal, quien dijo que fue alcanzado por uno de los disparos que provenían de la parte de abajo de la casa, así como los de Carlos Andrés Hernández García, William Solís Moreno, Diego Fernando Palomino Giraldo y Ronald Yecid Duarte Amaya.

Aludió al acta de reunión del personal de patrulleros y suboficiales que conforman el escuadrón móvil de carabineros No. 36 Sección 3DMET donde se dieron instrucciones sobre las medidas de seguridad en un acompañamiento que se realizarían a la SIJIN en una actividad de allanamiento, en la que aparece descritos los integrantes del EMCAR.

Manifestó además al oficio suscrito por el Jefe de la Unidad Especial de Investigación Criminal Tumaco, donde dijo que los integrantes de la Unidad Especial de Investigación Criminal de Tumaco que estuvieron presentes en el registro y allanamiento no dispararon en ningún momento sus armas de dotación, debido a que el indiciado una vez se percató de la presencia de la Fuerza Pública, reacciona escapando por una ventana y fue en la parte de afuera de la vivienda donde fue neutralizado por los policías integrantes del escuadrón móvil de carabineros que estaban apoyando el procedimiento y que fue lesionado por arma de fuego un policía integrante de ese grupo.

Se hizo mención de los testimonios rendidos en el proceso contencioso administrativo, en especial de los señores Roberto Antonio Zúñiga, Quiñones, Florinda Mesías Sevillano y Wilson Manuel Preciado Riascos., quienes dieron cuenta de las condiciones socioeconómicas y familiares, en especial del impacto negativo que tuvo en el núcleo familiar el deceso de Edilson Darío Centeno Tenorio, su actividad laboral, y los perjuicio socioeconómicos que su deceso le produjo a la familia, pero ninguno de ellos fue testigo presencial de los hechos.

Luego se refirió a la declaración de Wilson Gualberto Quiñones Quiñones, quien manifestó haber estado presente en el lugar, fecha y hora en la que ocurrieron los

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

hechos y quien relató que la encontrarse en la vivienda en la que ingresaron los policías de manera violenta estos le apuntaron con un arma en la cabeza, para posteriormente sacarlos a él y a su hermano, quedando únicamente el señor Edilson Darío Centeno y «ya encontrándose ellos afuera, escucharon varios disparos, y cuenta que al día siguiente se enteraron de la muerte del señor CENTENO»; que en la misma declaración se afirma que él no vio cuando mataron al señor Darío Centeno al encontrarse fuera de la casa, pero alcanzó a escuchar más de doscientos disparos.

De acuerdo al régimen de la falla del servicio precisó que el daño se encontraba demostrado, consistente en la muerte del señor Edilson Darío Centeno Tenorio, en el operativo policial.

Al efecto, señaló en cuanto a la falla del servicio estableció que no se hallaba probado el elemento que acreditara la responsabilidad de la entidad demandada, lo que permitía exonerar al Estado de la imputación endilgada en su contra, aspecto que rompía el nexo causal. Al efecto señaló:

«[...]

Es cierto, que de las entrevistas realizadas a los señores EDUARDO ESCOBAR SABOGAL, CARLOS ANDRÉS GARCÍA HERNÁNDEZ, WILLIAM SOLIS MORENO, DIEGO FERNANDO PALOMINO GIRALDO Y RONALD YECID DUARTE AMAYA [...], es posible destacar que el deceso del señor EDILSON DARÍO CENTENO TENORIO, ocurrió a raíz de una diligencia de allanamiento y registro, previamente ordenada por el funcionario competente y surtida por miembros del cuerpo policial, con acompañamiento de integrantes del EMCAR, en la que los policiales, luego de percatarse de que (sic) el señor CENTENO se tiró al mar, empiezan a escuchar distintos disparos con arma de fuego, quedando como producto de ello, un integrante del EMCAR herido, además del fallecimiento del señor EDILSON DARÍO.

No obstante lo anterior, no se pudo determinar en forma precisa, la forma en la que se presentaron los disparos con arma de fuego, ni por parte de quien provenían, pues si bien es cierto que del material probatorio allegado al proceso es factible determinar que los miembros del EMCAR propinaron disparos con sus respectivas armas de dotación, también lo es que en ninguna de las piezas documentales obrantes en el plenario, se puede constatar que los mismos fueron los que ocasionaron la muerte del señor EDILSON DARÍO CENTENO, pues no se cuenta con ningún estudio balístico del que pueda al menos inferirse que los disparos que éste recibió, hayan provenido de armamento de tipo oficial.

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00

Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

[...]

Así las cosas, NO resulta suficiente en esta instancia, acreditar que el daño hubiere sido imputable a la demandada, pues no se demostró que el (sic) éste hubiere sido producto de una FALLA EN EL SERVICIO, pues si bien la Fuerza Pública sí accionó su armamento de dotación oficial – circunstancia que no la ha negado el personal uniformado que se encuentra involucrado en la ocurrencia del hecho-, lo cierto es que NO se logró demostrar, pues se echó de menos el elemento probatorio demostrativo de ello, que los disparos recibidos por el señor EDILSON DARÍO CENTENO TENORIO, provinieron de armas de dotación oficial del cuerpo policial que se encontraba en la diligencia, pues como se dijo, NO se agregó al acervo probatorio ningún informe de balística, ni ninguna otra pieza que permita demostrar la responsabilidad de la POLICÍA NACIONAL en la muerte del señor CENTENO TENORIO.

No existe por tanto en este caso, la posibilidad de imputar la responsabilidad del Estado a título de falla en el servicio, por cuanto del análisis del material probatorio, este Despacho concluye que no es posible extraer algún elemento que permita tener por demostrada actuación irregular o anómala alguna por parte de la entidad demandada, bajo el entendido que, la simple verificación de un intercambio de disparos, no es motivo suficiente para vincular su responsabilidad.»

De acuerdo a lo anterior concluyó que: «El daño sufrido por la parte demandante como consecuencia del fallecimiento del señor EDILSON DARÍO CENTENO TENORIO, NO puede atribuirse a la entidad pública demandada, por NO haberse probado la existencia de una FALLA EN EL SERVICIO, toda vez que no se aportó la prueba suficiente e idónea para acreditar el nexo causal. En efecto, NO se logró demostrar que el hecho dañino haya sido producido directamente por la utilización indebida de las armas de dotación oficial, de donde NO nace para la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL, el deber de responder por los perjuicios causados. En ese entendido han de negarse las súplicas de la demanda». (f. 95 Cdno anexo).

#### **4.2. Recurso de apelación**

Contra la anterior decisión el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en el cual se señaló que no se tuvieron en cuenta los elementos probatorios que demuestran que hubo exceso de fuerza por parte de los miembros de la Policía nacional, como el acta de inspección técnica a cadáver de Edilson Darío Centeno; que con la providencia se desconoce la jurisprudencia del Consejo de Estado la cual refiere que en casos similares no se ha establecido una tarifa legal para endilgar responsabilidad al Estado, como es la existencia de un informe de balística, elemento que se utilizó para negar las pretensiones de la

demanda, aun cuando elementos de prueba como el acta de necropsia y el acta del levantamiento del cadáver demuestran que existió el exceso de fuerza de la policía nacional, de quienes se probó que hicieron uso de sus armas de dotación de en la fecha y hora de los sucesos su sustentan la demanda.

#### **4.3. Sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño**

En la sentencia de segunda instancia, de 26 de enero de 2018, el Tribunal Administrativo de Nariño, confirmó la decisión de primera instancia para lo cual realizó una relación probatoria del registro civil de nacimiento y defunción del señor Edilson Darío Centeno Tenorio; el certificado de matrimonio de los padres del causante; los registros civiles de los demandantes; la certificación expedida por la Empresa Social del Estado Centro Hospital Divino Niño de San Andrés de Tumaco en la que se relacionan los contratos, tiempos de servicio y honorarios que percibió el señor Edilson Darío Centeno cuando se desempeñó como auxiliar de archivo; el informe pericial de necropsia de medicina legal y ciencias forenses, Unidad Básica de 10 de julio de 2012; la copia del libro de minuta de servicios de la estación de policía de Tumaco, de población de la estación de policía de Tumaco; la providencia No. 11001010200020150078900 del Consejo Superior del Judicatura – Sala Disciplinaria No.036 de 6 de mayo de 2015 por medio de la cual se resolvió el conflicto positivo de competencias entre la Fiscalía 61 Especializada de Tumaco; y el Juez 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto, respecto de los hechos sucedidos el 11 de junio de 2012, en el municipio de Tumaco.

Se hizo referencia a la copia simple del informe pericial de necropsia y diagrama de lesiones del occiso; la copia del informe ejecutivo FPJ-3 de 11 de julio de 2012, dirigido a la Fiscalía 61 Especializada de Tumaco, con el cual se solicita una orden de allanamiento y registro para el inmueble ubicado en la cabecera del Municipio de Tumaco en donde, según la denuncia operaban personas conocidas como Darío y Felipe, con sus escoltas fuertemente armados; la copia de la orden de allanamiento y registro con fines de captura y flagrancia de búsqueda de elementos materiales de prueba por medio de los cuales el Fiscal 61

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Especializado de Tumaco ordenó el allanamiento y registro del inmueble relacionado en el informe ejecutivo FPJ-3 de 11 de julio de 2012.

Copia del informe de registro y allanamiento de 11 de julio de 2012, copia del formato de atención de la diligencia, donde se plasmaron las firmas de los señores Willington Jesus Quiñones Quiñones, Nilson Gualberto Quiñones Quiñones y Luis Augusto Malba Cortés.

De igual manera se hizo alusión al formato de entrevista de 12 de julio de 2012, del Patrullero Reinel Eduardo Sabogal, quien según se dijo, resultó herido en la diligencia de allanamiento y registro, donde rindió su versión de los hechos que ocurrieron el día anterior, así como a formatos de entrevista rendidos por los señores Teniente Ronald Yesid Duarte Amaya, Patrullero Carlos Andrés García Hernández y Patrullero William Solis Moreno; funcionarios que atendieron la diligencia y que dijo eran coincidentes con el informe de allanamiento y la versión del Patrullero Reinel Escobar Eduardo Sabogal, sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que llegaron al inmueble objeto de la diligencia, la cantidad de personas que encontraron en el inmueble y su reacción antes, durante y después del procedimiento, el lanzamiento de objetos al mar, la huida de Edilson Darío Centeno Tenorio y los disparos que generaron que los servidores de la Policía Nacional accionaran sus armas de dotación.

Luego de lo anterior, precisó que en este caso aplicaría de manera preferente el título de imputación de falla del servicio, al evidenciarse sus elementos, donde no se discute el concurso de una actividad peligrosa como la manipulación de las armas de fuego donde la responsabilidad es de tipo objetivo, sino el presunto incumplimiento de las normas que regulan el uso de la fuerza, donde se analiza el aspecto subjetivo de la conducta. Al efecto, citó la sentencia de 9 de abril de 2014, con ponencia del Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, proferida dentro del expediente 29811.

Así entonces, dijo que en este caso se encontraba acreditado el daño, que se traduce en la muerte del señor Edilson Darío Centeno Tenorio, que se causó con arma de dotación oficial de propiedad de la Policía Nacional en desarrollo de una

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

diligencia de allanamiento y registro con fines de captura en flagrancia y búsqueda de elementos materiales de prueba, que se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la cabecera del Municipio de Tumaco.

Por tanto, coligió que no existía en el expediente alguna prueba que acredite que el señor Edilson Darío Centeno tenorio fue acribillado por la espalda y posteriormente lanzado su cuerpo al mar por los miembros de la Policía Nacional que hacían parte del operativo, ni que diera certeza respecto de las afirmaciones que se consignaron en la demanda como sustento de las pretensiones; al contrario el material probatorio que se recaudó a través del recurso procesal permitió establecer que en desarrollo de la diligencia de registro y allanamiento se presentó un intento de huida por parte del señor Centeno Tenorio e inmediatamente se registro un cruce de disparos en el que resultó herido un funcionario de la policía, lo que se encontraba avalado con la firma que en el acta de la diligencia plasmaron quienes se encontraron en le inmueble, razón por la cual se descartó el uso desproporcionado de la Fuerza.

Por esto, expresó que el daño no le resultaba imputable a la demandada, y que la declaratoria de responsabilidad administrativa solo era posible con apego a las reglas de proporcionalidad y certeza entre el daño por el que se reclama y la actuación de la entidad a la cual se pretende imputar el daño y no es procedente en estos casos adaptar las decisiones a los argumentos de otras autoridades judiciales como era el caso de la decisión que desató el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar.

Respecto del testimonio que rindió el señor Nilson Gualberto Quiñones Quiñones, de 4 de noviembre de 2016, dijo que no se podía extraer con certeza que los hechos se presentaron de la manera como se presentó en la demanda, pues él con su firma y huella fue una de las personas que respaldó con su firma y huella el contenido del acta de informe de registro y allanamiento de 11 de julio de 2012 en la cual se consignaron los acontecimientos en los que se generó la muerte de Edilson Darío Centeno Tenorio. Finalmente precisó:

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00

Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

« Así las cosas, encuentra la sala debidamente acreditado que el personal policial se encontraba amparado en la orden de allanamiento y registro con fines de captura en flagrancia y de búsqueda de elementos materiales de prueba y/o EF, del 11 de julio de 2012, por medio de la cual el Fiscal 62 Especializado BACRIM del Municipio de Tumaco (N. ) ordenó el allanamiento y registro del inmueble, cuyos resultados se relacionaron en el informe ejecutivo-FPJ-3-del 11 de julio de 2012, y no existe prueba que permita a la Sala concluir que realmente los servidores policiales se excedieran en el uso de la fuerza, y que fuera ésta la causa eficiente del deceso del señor Centeno Tenorio, o que se hubiera podido evitar la muerte del civil que, con su actuar imprudente ocasionó el daño.

Si bien se acreditó que la muerte del señor Edilson Darío Centeno Tenorio ocurrió por el accionar de miembros de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que la conducta de los agentes estatales se encuentra justificada por la actuación bélica, de la que existe certeza, que fue desplegada por el causante, esto es, la de arremeter con disparos de armas de fuego contra los uniformados, con el fin de huir del lugar en el que se llevaba a cabo la diligencia, y no se aportó al plenario elemento demostrativo que pudiera generar duda respecto de que la versión de la entidad demandada no se ajuste a la realidad de aquello que ocurrió.

Por otro lado, la tesis de que las personas que estaban en el inmueble se encontraban desarmadas cuando se llevó a cabo el operativo no puede ser el punto de referencia para que por sí sola genere certeza sobre la responsabilidad de la entidad demandada, como tampoco el hecho de que las personas que se encontraban en la residencia fueran sujetos de guarda y custodia de la Policía Nacional, pues las pruebas documentales que reposan en el proceso dan cuenta de la fuga que protagonizó el señor Centeno Tenorio, además del hecho de que (sic), con posterioridad a los eventos materia de estudio, se encontraron bajo la residencia allanada, dos armas de fuego habilitadas para disparar y cuatro teléfonos celulares, objetos estos que facultaron a los policiales a irrumpir en la residencia, ante la advertencia que generó el sonido de los elementos que se estaban arrojando al mar.

Es indudable que la muerte del señor Edilson Darío Centeno Tenorio se produjo como consecuencia de su exclusiva culpa, cuando el en su afán de huir generó un enfrentamiento armado contra los miembros de la Policía Nacional, quienes se vieron en la obligación de repeler el ataque, en legítima defensa de su vida, de su protección y de las demás personas que se encontraban en el lugar, lo cual permite concluir que no existe nexo de causalidad entre el daño y la actuación de la demandada, habida cuenta que fue el proceder imprudente de la víctima la causa eficiente del daño. En consecuencia, se confirmará el fallo apelado».

## **5. Análisis de la Sala.**

En cuanto al defecto fáctico, se especificó en la demanda de tutela, que no se tuvo en cuenta por parte del Tribunal el acta de inspección técnica a cadáver en la cual se dijo que murió por siete impactos de bala, así como la declaración del señor Carlos Andrés García Hernández, Jefe del Grupo contra Bandas Criminales de la SIJIN de Tumaco, rendido el 26 de mayo de 2014, a instancias del Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto, el cual precisó que el señor Edilson

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00

Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros

Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Darío Centeno Tenorio se encontraba desarmado y en custodia de los miembros de la Policía Nacional.

Se dijo además que no se tuvieron en cuenta los testimonios de los señores Florinda Mesías Sevillano, Wilson Manuel Preciado Riascos, Roberto Antonio Zúñiga Quiñones, Nilson Gualberto Quiñones Quiñones, quienes precisaron que el causante se encontraba en custodia por parte de los miembros de la Policía Nacional. Tampoco se atendió a las providencias del Consejo Superior de la Judicatura, de 6 de mayo de 2015 y del Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar de Pasto, las cuales, según el demandante, señalaron que hubo uso excesivo de la fuerza por cuanto el señor Edilson Darío Centeno Castillo se encontraba protegido en cuanto ya había sido revisado y se encontraba bajo injerencia de la Policía Nacional.

Ahora bien, es evidente que el Tribunal realizó un serio análisis de conformidad con las pruebas ya indicadas, en las cuales, como se advierte a folio 12 de la sentencia<sup>11</sup>, tuvo en cuenta los formatos de entrevista rendidos, entre otros, por el Patrullero Carlos Andrés García Hernández, quien señaló que las personas que se encontraban dentro de la vivienda estaban desarmadas, no obstante, el mismo dijo que se encontraba a la entrada y no pudo percatarse del momento en que ocurrió la huida del joven Edilson Darío Centeno Tenorio, pero coincidió en afirmar que escuchó un tiroteo y que al salir de la casa se percató que uno de sus compañeros fue herido por arma de fuego y uno de los muchachos de la casa había saltado por la puerta trasera al mar. Que como a las dos horas encontraron el cuerpo flotando y además, debajo de la casa recuperaron dos armas de fuego y varios celulares.

Esta versión de los hechos que coincide con la de los demás policías ( ff. 58 a 67 C. 2 del expediente en préstamo) fue uno de los aspectos que tuvo en cuenta el Tribunal para advertir que en este caso no se configuraba la responsabilidad del Estado, por cuanto el joven Edilson Darío Centeno Tenorio huyó de la casa que había sido allanada y además existían serios indicios de su ataque a la Policía Nacional por lo que ocasionó el tiroteo que dio lugar a su muerte.

---

<sup>11</sup> El expediente en préstamo viene en desorden y mal foliado.

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Ahora bien, señala el apoderado que no se tuvieron en cuenta los testimonios de Florinda Mesías Sevillano, Wilson Manuel Preciado Riascos, Roberto Antonio Zúñiga y Nilson Gualberto Quiñones Quiñones, especialmente de este último para indicar que el joven fallecido se encontraba en custodia de la Policía cuando ocurrió su deceso.

Al respecto debe precisar la Sala que en efecto, los primeros tres testigos no presenciaron los hechos por lo que únicamente se refirieron a la afectación que se produjo en el núcleo familiar con la muerte de Edison Darío Centeno, siendo evidente que al no haberse probado los tres elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado por falla del servicio, mal podía avanzar el Tribunal en el análisis de los perjuicios padecidos por la familia, tema pertinente a la hora de establecer la reparación del daño.

Sin embargo, advierte la Sala que el Tribunal sí apreció el testimonio del señor Nilson Gualberto Quiñones (así se advierte a folio 15 de la sentencia) para lo cual precisó que del mismo no se puede extraer con certeza que los hechos se presentaron de la manera como se plasmaron en la demanda y además el testigo respaldó con su firma y huella el contenido del acta de registro y allanamiento de manera libre y voluntaria.

Además, ninguna prueba permitió demostrar que el deceso del causante ocurrió dentro de la vivienda allanada, sino que ésta se produjo cuando éste se lanzó al mar, con lo que su protección salió del ámbito de custodia de los Policías que llevaban a cabo el operativo, situación que fue corroborada con el dicho de los testigos quienes coincidieron que los disparos se produjeron luego de que éste saltara fuera de la vivienda.

Indicó además el accionante que no se tuvo en cuenta las providencias del Consejo Superior de la Judicatura y del Juzgado 182 de Instrucción Penal Militar, proferidas en el marco de la definición de competencia, en las cuales se indicó que hubo un uso excesivo de la Fuerza, sin embargo, advierte la Sala que no era preciso referirse a ellas en tanto el Tribunal Administrativo de Nariño es el juez

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

natural, a quien, dentro de la órbita de su competencia, le correspondía hacer el análisis probatorio correspondiente y decidir conforme a la jurisprudencia de esta Corporación si debía accederse o no a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

En lo que respecta al desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado, específicamente a la sentencia de la Sección Tercera de 20 de octubre de 2014, con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, dentro del proceso radicado 05001-23-31-000-1996-00439-01, valga señalar que la exigencia del informe de balística para atribuir la muerte del joven Darío centeno al Policía Nacional, fue superado en la sentencia de segunda instancia donde sí se aceptó que aun sin esa prueba, era dable atribuir ese deceso a los Policías que participaron en el mencionado operativo.

Tampoco es viable analizar si se desconoció el precedente plasmado en sentencia de 24 de mayo de 2017, dentro del proceso radicado con el No.52001233100020110000301, con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón, frente a la posición del garante del Estado al encontrarse el joven Darío Centeno bajo la custodia de la Policía, pues las pruebas analizadas por el Tribunal y aportadas al proceso permitieron establecer que la muerte ocurrió cuando el joven huyó de la vivienda en la que se practicaba la diligencia de allanamiento.

Por lo anterior, en la medida en que no se advirtió la configuración de ninguno de los defectos señalados se negará el amparo *iusfundamental* solicitado por los señores Luis Jairo Centeno Castillo y otros.

### III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01433-00  
Accionante: Luis Jairo Centeno Castillo y otros  
Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

### FALLA

**PRIMERO.- NIÉGASE** la acción de tutela interpuesta por los señores Luis Jairo Centeno Castillo, Flor María Tenorio Preciado, Andersson Centeno Tenorio y Kenia Saray Centeno Tenorio, a través de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, conforme a lo señalado en la parte motiva de ésta providencia.


**SEGUNDO.- LÍBRENSE** las comunicaciones de que trata el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

**TERCERO.- DE NO SER IMPUGNADA**, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMÍTASE el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

### CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

  
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

  
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

  
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

